

Globethics Repository



Chile: las tareas del sindicalismo [Chile: the tasks of unionism]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Campero, Guillermo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-12 03:24:15
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221352

Chile: las tareas del sindicalismo

Guillermo Campero

Guillermo Campero: Sociólogo chileno. Estudios de Posgrado en L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París). Experto de la OIT (1975-1980). Director Académico del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) y Coordinador de la Comisión de Estudios Laborales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

El artículo se concentra en dos temáticas centrales. La primera corresponde a los antecedentes previos a la situación actual del sindicalismo chileno a partir del cambio de escenario sociopolítico que significó la intervención militar de 1973 contra el régimen de la Unidad Popular. La segunda se refiere a las condiciones materiales y políticas que marcan la realidad sindical del presente, las cuales constituyen el contexto en el cual se definen los desafíos y tareas del futuro para el sindicalismo chileno.

Respecto del primer punto el artículo sostiene que el sindicalismo chileno, pese a que fue duramente golpeado, logró sobrevivir y jugar un rol principal de interpelación crítica frente al modelo de sociedad y política implantado. Al mismo tiempo, sin embargo, no logró articular establemente una estructura de movilización de sus bases que correspondiera, en la acción, en la legitimidad obtenida para su rol político a nivel social global. En cuanto a la segunda problemática se argumenta que la crisis económica manifestada en empobrecimiento y en un desempleo persistente, el que opera como contención de la lucha sindical, y la aún débil consistencia de las coaliciones políticas democráticas que no otrecen todavía estrategias claras de salida del autoritarismo, dan lugar a un escenario que dificulta al movimiento sindical superar sus limitaciones de movilización. Sin embargo, se sostiene también que éste ha logrado identificar tres tareas principales que de ser exitosas

pueden asegurar un despegue significativo. Ellas son: privilegiar más sustantivamente su rol de reivindicación de las demandas laborales específicas, sin abandonar su papel político global; definir una mayor autonomía social frente a los partidos y, convertirse en un referente principal para convocar a un proceso de concertación social por la democracia capaz de interpelar a las fuerzas políticas democráticas para que asuman un rol de unidad nacional.

Este documento intenta presentar un breve análisis de las condiciones actuales del sindicalismo en Chile, en el contexto de un proceso sociopolítico global tensionado por las luchas en demanda de la reconstrucción democrática del país - de las cuales aquél es un actor principal - y, a partir de allí, propone una visión de su prospectiva futura.

El examen de los desafíos que enfrenta hoy la acción sindical, cuya resolución marcará sin duda el perfil de su rol en las estrategias del movimiento social y político democratizador en los próximos años, requiere como antecedente necesario, una descripción sintética de los principales rasgos que han marcado su evolución en el periodo que se inicia en 1973 con el gobierno militar, el cual puso fin a la experiencia prosocialista del régimen de la Unidad Popular (1970-1973), por lo que ello se incluye como parte sustantiva del análisis.

El escenario post 1973

La ruptura por la intervención militar de 1973, del largo proceso de democratización de la sociedad chilena, iniciado en la década de los años veinte y consolidado progresivamente en las cinco décadas posteriores - con tensiones e involuciones por cierto - tuvo entre sus principales víctimas al, hasta entonces, influyente movimiento sindical. Ello fue consecuencia principalmente de la acción coactiva del nuevo régimen, que identificaba al sindicalismo existente como uno de los actores sociales más decisivos de la red social que constituía el soporte, no sólo de la reciente Unidad Popular, sino también del orden social histórico previo (calificado de socializante) que aspiraba a desarticular. En consecuencia, aquél constituyó, desde el primer momento, un adversario a destruir. Pero, conjunta y asociadamente con esta racionalidad política, operó posterior y negativamente sobre el movimiento sindical la estrategia desindustrializadora y de orientación transnacionalizante que se estableció como modelo económico y el conjunto de transformaciones institucionales que destruyeron el sistema político de partidos y

el andamiaje estatal y público en cuyo contexto la acción sindical se había desarrollado. De esta forma, el sindicalismo no sólo sufrió el hostigamiento represivo, sino que también vio bloqueados sus mecanismos históricos de expresión política (los partidos), desarticulados sus tradicionales recursos de acción institucional (la institucionalidad jurídico-laboral) y desintegradas progresivamente parte de las bases materiales sobre las que se había constituido históricamente en su fase contemporánea (la industria manufacturera y de mercado interno). Al mismo tiempo, se vio enfrentado a una persistente y unilateral campaña ideológica de desprestigio de aquellas concepciones de sociedad que lo habían animado tradicionalmente (el socialismo en cualquiera de sus plurales manifestaciones).

Las condiciones antes descritas no afectaron solamente a la acción sindical, sino que constituyeron, de hecho, adecuándose a distintos segmentos sociales, factores de mutación de todo el escenario sociopolítico chileno con impacto para el conjunto de la trama de representaciones sociales y políticas que conformaban la democracia chilena. Así entonces, lo que se produce es un vacío de espacios para la acción de actores sociales y políticos, imponiéndose un diseño de régimen político autoritario que concentra la gestión de la sociedad en un Estado prácticamente militarizado y en una capa tecnocrática asociada que se hace cargo de un proyecto de reorganización capitalista en un sentido transnacionalizante de la economía.

El cuadro reseñado precedentemente, si bien se mantiene como la lógica sustantiva que continúa inspirando al régimen, ha sufrido alteraciones como resultado de las crisis que el proyecto gubernamental experimentó en su desarrollo. Estas crisis se refieren tanto al fracaso de su modelo económico, que no produjo el "despegue" capitalista esperado, sino más bien una recesión profunda con resultados de empobrecimiento general de la sociedad, como a la incapacidad para solidificar una nueva institucionalidad política (la Constitución de 1980) capaz de ganar legitimidad y contener - como lo esperaba - la reaparición de las presiones y reivindicaciones sociales. Así entonces, el último quinquenio muestra una situación en la cual el régimen vive un colapso económico y sólo logra desarrollar algunas formas instituciones nacionales (entre ellas, la más importante, el llamado "Plan laboral" que rige las relaciones del trabajo) expresivas de sus concepciones privatizadoras y segmentadoras de las relaciones sociales, pero en la cual lo que predomina es su progresivo aislamiento sociopolítico y la acumulación ascendente de conflictos sociales que se orientan por demandas de restitución de la democracia política. Lo anterior ha obligado al régimen militar a retroceder parcialmente en algunos campos y a congelar en otros sus objetivos de reestructuración global y autoritarista de las bases históricas de la sociedad chilena,

siguiendo al mismo tiempo una ruta de combinar la coacción sistemática con algunas limitadas y coyunturales aperturas, en la perspectiva de sostener las posibilidades de sobrevivencia de su proyecto. Proyecto que en el presente, aparece, sin embargo, cada vez menor como una idea de sociedad y más como una personalización del interés de perpetuación en el poder del ocupante de la jefatura del Estado.

El proceso sindical

En el proceso anterior, muy apretadamente expuesto, considerando la abundante literatura existente al respecto, el sindicalismo chileno ha vivido tres etapas distintivas. La primera de ellas (73-75) fuertemente marcada por los efectos de la desarticulación del sistema político y por la coacción ejercida, se caracterizó por un esfuerzo de sobrevivencia de las organizaciones de base y dirección con el fin de reconstituir las capacidades básicas, sobre todo de defensa laboral frente a la situación de drástica vulnerabilidad en que se encontraban. Si bien sus resultados fueron limitados, este esfuerzo permitió preservar la institución sindical en la empresa como un referente de defensa que jugó un rol de cierta contención frente a la dinámica de coacción gerencial y gubernamental que se desencadenó. En los niveles de dirigencia nacional, algunos sectores en particular aquellos ligados a la izquierda política, buscaron recomponer algunas redes mínimas de conexión con las estructuras partidarias y con aquéllas del sindicalismo internacional, a fin de generar mecanismos de rearticulación elementales para confrontar el impacto atomizador sufrido. Otros sectores, vinculados al centro político, intentaron abrir alguna interlocución con el nuevo régimen en la expectativa, pronto frustrada, de que éste restituiría en breve lapso los derechos sindicales.

La segunda etapa (75-83) se caracterizó por la constitución de núcleos de dirigencia nacional que asumieron un definido rol de oposición política al régimen militar. Estos grupos fueron expresivos tanto de la izquierda como del centro político (corrientes que se manifestaban en la Coordinadora Nacional Sindical - CNS - como en el "Grupo de los 10"). La naturaleza de estas agrupaciones sindicales fue sobre todo la de actores sociales que jugaban el papel de interpeladores fuertemente críticos no sólo de la práctica inmediata del régimen, sino también de su proyecto global. Constituyeron así la primera manifestación social de confrontación pública, a nivel nacional, frente al gobierno establecido. Su importancia radicó entonces, no en que fueran representantes de una base sindical reorganizada y movilizadora - pues ésta se hallaba bloqueada y amedrentada -, sino en que fundaron un referente de resistencia y cuestionamiento con una visibilidad sociopolítica que desbordaba con mucho al puro campo sindical. Sólo la Iglesia

católica, en el campo de los derechos humanos, jugaba un rol de dimensiones parecidas en ese momento. De este modo, iniciaron la recuperación de un papel de convocatoria social amplia que históricamente había sido patrimonio del sindicalismo en Chile desde los años de la Federación Obrera de Chile (FOCH), la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y la Central Unica de Trabajadores (CUT), las tres grandes centrales que sucesivamente, comandaron el movimiento sindical en el país desde 1910 hasta 1973.

La contraparte de este marcado rol político nacional fue, sin duda, la insuficiente articulación de estructuras que rearmaran una organización sindical bien conectada hacia sus bases. Ello, que no tenía efecto negativo en cuanto a su legitimidad, pues existía respaldo para su posiciones entre los trabajadores, sí repercutía en la capacidad para jugar un rol de representación de las demandas laborales que se daban al nivel de los lugares de trabajo. Sobre todo esto adquirió mayor importancia en el momento de implantación del llamado "Plan Laboral" de gobierno (1979). Este Plan, después de casi seis años de inexistencia de regulaciones laborales, vino a imponer una institucionalidad de relaciones del trabajo que si bien reabrió la negociación colectiva encapsuló a los sindicatos en los límite de la empresa, restringió sus prerrogativa a un mínimo y en los hechos eliminó el derecho de huelga como un instrumento efectivo de presión sindical. La nueva situación creada por el Plan Laboral dio lugar, sin embargo, a una dinámica nueva que se vivió en la base sindical, sobre todo con relación a la negociación colectiva reabierta y respecto de la cual la dirigencia nacional no disponía de instrumentos de acción adecuados y eficaces para conducirla. Se produjo así un proceso dual hacia fines de esta segunda etapa, en que, por una parte, operaba una dirigencia sindical con una clara visibilidad sociopolítica y una importante capacidad de convocatoria intersocial, dotada además de una legitimidad no discutida en ese nivel y, por otra parte, se desarrollaba una reactivación progresiva de la acción reivindicativa en las empresas, en lo fundamental desligada orgánicamente de aquella dirigencia.

Es necesario precisar, por cierto, que las dirigencias estuvieron siempre sometidas a una coacción sistemática, que se expresó en destierros, encarcelamientos, ilegalización de las federaciones que formaban parte de los núcleos nacionales (1977) - éstos, ilegales también - y que nunca obtuvieron posibilidades de interlocución con las autoridades gubernamentales. Todo ello interfería sus posibilidades de éxito en los esfuerzos orgánicos que emprendían.

La tercera etapa (1983-86) está marcada por tres procesos. El primero es el auge de la movilización social opositora que se expresa en las llamadas "protestas

nacionales": manifestaciones urbanas de descontento social expresadas a través de demostraciones callejeras masivas (marchas, "cacerolazos", barricadas, ocupación de escuelas, etc.) que responden a una convocatoria de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y luego del Comando Nacional de Trabajadores (CNT); pero que adquieren un ámbito de respuesta que sobrepasa el estrictamente sindical. Más precisamente aún, el mundo sindical de base se moviliza limitadamente –atemorizado por el fantasma del desempleo y por la represión ejercida sobre el trabajador militante fácilmente identificable en su empresa- y son más bien los segmentos juveniles y aquellos de las zonas marginales de las ciudades (pobladores) los que asumen un rol portagónico en las acciones de protesta. El carácter de este proceso movilizador muestra entonces que se mantiene la situación de una dirigencia sindical con capacidad convocante de tipo global pero también que, aún en períodos de alza de la lucha social frente al régimen, ella –pradojalmente– no consigue poner plenamente en juego toda su propia fuerza de base.

La constatación anterior, que ya se venía haciendo evidente en la etapa previa, da lugar al segundo proceso que emerge de esta fase. Este se expresa - aunque incipientemente - en la orientación de las dirigencias a asumir, progresivamente, una estrategia definida por un perfil más estrictamente sindical, es decir, de recuperación de su rol social, de agente de representación de reivindicaciones surgidas en el lugar de trabajo, manifestando a los partidos políticos la urgencia de que ellos asuman más decididamente el rol político global. Esta opción no implica la renuncia a su papel de referentes políticos de alcance intersocial, pero si parece indicar que existe una convicción acerca de que la movilización masiva del mundo sindical, en situaciones como la chilena, no se articula directamente a los propósitos del cambio político global si no es a través de una imbricación o concatenación muy ajustada - que debe lograr la dirigencia - entre las reivindicaciones laborales específicas y las acciones que conducen a dicho cambio.

El tercer proceso que marca la etapa, y que está relacionado con las dos anteriores, es aquél de la consolidación o cristalización en diferentes organizaciones nacionales de las tendencias político-sindicales preexistentes en el movimiento sindical. En efecto, desde 1975 surgieron expresiones diferentes de corrientes sindicales (manifestadas principalmente en la Coordinadora Nacional Sindical - CNS - y en el "Grupo de los 10", después UDT y hoy CDT - Central Democrática de Trabajadores), todas históricamente existentes en el seno de la antigua CUT vigente hasta 1973. Pero ni una ni otra habían dado lugar en su historia previa a organizaciones diferenciadas, sino que compartían el espacio común de la Central Unica de Trabajadores, con tensiones y competencias por cierto. Después de 1975

estas corrientes aparecen nucleadas en orgánicas distintas, aun cuando ninguna de ellas se define como una central sindical propiamente tal y el tema de la necesaria unidad organizacional se mantiene como una aspiración vigente. Sin embargo, de 1983 en adelante, con la formación de la Central Democrática de Trabajadores (CDT) cuyos antecedentes, como ya se menciono, son primero el Grupo de los 10 y después la Unión Democrática de Trabajadores (UDT), la cuestión de la pluralidad de centrales pasa a ser un hecho efectivo. Así entonces, en la actualidad coexisten el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) cuyas bases principales son la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), la Confederación del Cobre (CTC), el Comando Nacional del Petróleo (CNP), otras organizaciones, y la ya mencionada CDT. Adicionalmente a estos dos grandes conglomerados (CNT y CDT) existen el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) antigua y más bien pequeña organización de origen cristiano, el MSU (Movimiento Sindical Unitario), una estructura reciente que aglutina algunas experiencias de organización sindical territorial (por zonas industriales más que por ramas funcionales) y la CEPCH (Confederación de Empleados del Sector Privado) de antigua existencia y una de las pocas centrales, con estatuto legal vigente.

En términos sintéticos puede señalarse que una de las problemáticas cruciales que tensiona la conformación de la dos principales agrupaciones (CNT y CDT) es la opción diferente de una y otra acerca del tipo de coalición político-sindical que debe conducir al movimiento sindical. En tanto que el CNT se constituye a partir de una coalición centro-izquierda con presencia, entre esta última, de las corrientes de tradición marxista, la CDT privilegia una conducción sin la presencia de las corrientes marxistas y apela a una menor politización de la estructura sindicales.

Este tercer proceso muestra, en consecuencia, que las condiciones de unificación organizacional que se dieron en la fase pre-73 no se reproducen hoy día que ello tiene su base sobre todo en una controversia de origen ideológico. Esta, habiendo existido tradicionalmente en el pasado, pudo, sin embargo, ser superada en ese entonces, a nuestro juicio, en buena parte debido a un mayor grado de acuerdo político sobre este punto entre las formaciones partidarias ligadas al sindicalismo y también a que las exigencias de eficacia para la acción sindical, en un contexto de democracia abierta, que provenían desde la base, presionaban por unificar las demandas laborales en un solo y poderoso interlocutor laboral frente al Estado y al empresariado. En el cuadro político chileno actual, la ausencia de una unidad política consistente entre las fuerzas democráticas y la distancia aún no bien superada entre direcciones superiores y bases en el sindicalismo, favorece la autonomía del debate casi puramente ideológico y obstaculiza las dinámicas unificadoras que surgen sobre todo de la acción concreta como ocurrió

históricamente. En esta ideologización del debate sindical sobre este punto juega también un rol de mayor presencia en Chile de las corrientes sindicales internacionales, las cuales, como se sabe, son tributarias de la segmentación ideológica que marcó al mundo laboral organizado desde la posguerra.

Con todo, este tercer proceso no anuló, hasta ahora, los intentos de convergencia en acciones concretas en favor de la democratización del país de ambos núcleos sindicales (CNT y CDT). Así, en ocasiones, la CDT participó junto al Comando en estrategias de confrontación al régimen y frente a la violación de derechos laborales normalmente concurren ambas a las movilizaciones de protesta.

En síntesis, los trece años de régimen militar impactaron fuertemente en el plano político, orgánico y en sus bases materiales de desarrollo al sindicalismo. Sin embargo, pese a ello, éste logró reconstituirse como un actor de visibilidad nacional y jugó el rol de principal confrontador social de la política gubernamental. Al mismo tiempo, sin embargo, se escindió en dos sentidos: de una parte, prevaleció una conducción superior políticamente actuante pero con dificultades para estructurar y ligarse establemente con una base que luchaba por sus necesidades de la sobrevivencia coyuntural. De otra, se segmentó en corrientes político-ideológicas que adquirieron expresión orgánica propia (CNT-CDT), hecho inédito en la historia previa de convivencia de las tendencias políticas bajo un mismo espacio organizacional (la CUT).

Los desafíos del futuro

La descripción y análisis ya presentados permiten disponer de una noción muy sintética pero sustantiva de la naturaleza del proceso posterior a 1973. Es necesario, sin embargo, graficar el "estado material" del sindicalismo en 1976 para apreciar sus condiciones actuales con mayor precisión.

El cuadro N° 1 muestra la evolución de afiliados en sindicatos y la tasa de afiliación sobre la población ocupada en el decenio 73-83.

La evidencia de las cifras es suficientemente clara como para ahorrar comentarios sobre el impacto sufrido por el sindicalismo. En el sector agrícola, que no está considerado en el cuadro, para 1973 se estimaba una afiliación cercana a 250.000 campesinos en sindicatos. En el decenio posterior las estimaciones se aproximan a no más de 23.000 socios (a base de datos de la Dirección del Trabajo). Causas de esta fuerte caída de la sindicalización están naturalmente en el grave desempleo como primer y fundamental origen. Pero también en el cambio de composición del

empleo en algunas ramas que eliminó obreros, aumentó los cuadros de administración, a menudo no sindicalizables y extendió el trabajo temporal o por medio de contratistas que reclutan mano de obra por períodos. En tal resultado influyó al mismo tiempo las condiciones de coacción que crearon temor a sindicalizarse y en cierta medida la sensación de que el sindicato tenía limitadas posibilidades de éxito en sus tareas.

CUADRO Nº 1
OCUPACION Y AFILIACION POR SECTORES

	1973			1983			Variación Afil./Ocup.
	Ocup.	Afil.	Afil. %	Ocup.	Afil.	Afil. %	
Minería	104,6	81,6	78,0	58,1	47,9	82,3	4,3
Industria	545,0	280,1	51,4	379,3	98,1	25,8	- 25,6
Constr.	163,9	54,0	32,9	85,7	8,5	9,9	- 23,0
Electr.	29,7	16,7	56,1	21,4	10,0	46,6	- 9,5
Comerc.	427,2	116,2	27,2	645,5	53,2	8,2	- 19,0
Transp.	199,9	83,3	41,6	180,5	44,0	24,4	- 17,2
Servicios	920,9	47,9	5,2	1.260,4	35,4	2,8	- 2,4
Total	2.391,2	679,9	28,4	2.630,9	297,2	11,3	-17,1

FUENTE: Frías, Patricio: "Afiliación y Representatividad del Movimiento Sindical", Documentos del CED, No. 83, 1985, Chile.

El cuadro Nº 2 permite apreciar la evolución de la desocupación y la estructura de la población ocupada por ramas de actividad entre 1960 y 1984.

CUADRO Nº 2
POBLACION OCUPADA A NIVEL NACIONAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
(en miles de personas)

	1960	1962	1964	1966	1968	1970	1972	1974	1976	1978	1980	1982(*)	1984(*)
Agricultura y Pesca	707,6	684,8	688,6	670,2	640,6	625,6	530,5	510,0	524,0	529,8	535,8	482,8	515,4
Minas y Canteras	92,5	91,0	86,5	84,2	82,8	88,2	93,4	103,2	100,0	95,2	88,8	66,8	77,7
Industria	370,1	399,3	419,6	458,7	477,8	492,2	554,1	515,3	499,5	525,4	552,8	394,7	475,4
Electricidad, Gas y Agua	10,8	14,3	17,0	18,5	19,6	22,4	27,2	27,7	28,1	31,8	35,9	36,3	36,3
Construcción	130,5	147,4	183,5	183,2	178,6	190,0	204,2	158,3	101,5	117,0	136,2	75,5	101,9
Comercio	281,9	287,8	305,6	309,2	327,4	335,1	364,2	354,5	355,0	411,4	474,7	410,1	495,1
Transporte y Almacenaje	121,2	133,9	143,3	154,6	169,0	182,8	199,5	184,3	182,9	200,6	219,9	193,1	204,7
Servicios Financieros	36,8	37,8	38,7	42,5	46,7	52,1	56,6	56,7	60,9	64,2	67,6	73,5	73,1
Servicios Comunales y Sociales	565,6	584,4	605,1	676,2	767,2	777,7	878,1	874,7	931,4	980,2	1.029,1	1.102,2	1.163,9
Total	2.317,0	2.380,7	2.488,9	2.597,3	2.709,7	2.766,1	2.907,8	2.784,7	2.783,3	2.955,6	3.142,8	2.835,0	3.143,5

FUENTE: Banco Central: Indicadores Económicos y Sociales 1960-82.

(*) = estimación a base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La observación del conjunto de las informaciones cuantitativas presentadas muestra con claridad que hubo dos sectores claramente perjudicados tanto en lo sindical como en sus condiciones de empleo: la industria y la construcción. Si bien otros sectores sufrieron también efectos negativos, lo importante de los dos señalados es que constituían las áreas que con mayor fuerza representaban la base de movilización del sindicalismo ligado a la antigua CUT. Pero al mismo tiempo, hay que decir que la distribución proporcional de fuerza sindicalizada por sectores sigue siendo básicamente la preexistente, aun cuando más reducida en términos globales. Esto es importante, pues indica que no hubo mutaciones drásticas en cuanto a que algunos sectores perdieran importancia sindical relativa y otros la adquirieran, generando así un proceso de anulación de la experiencia acumulada históricamente en ciertas áreas y de aprendizaje reciente en otras. En alguna medida la idea del Plan Laboral del gobierno era que surgirían nuevos sectores sindicales, sobre todo en los servicios y el comercio y en algunas áreas que se modernizarían, desplazando al viejo sindicalismo industrial y minero, "politizado" y "atrasado". Esto no ocurrió, pues si bien el sector comercial y financiero se expandió en ocupación no dio lugar a un proceso de mayor sindicalización, el que incluso cayó por debajo de sus tasas anteriores. Así entonces, pese a lo golpeado, el sindicalismo industrial y minero, el sector de la energía y el transporte continúan concentrando los principales conglomerados sindicales. Esto ha significado que la "memoria" sindical permanezca vigente y que las tradiciones de lucha y organizativas hayan podido ser heredadas, pese a las limitaciones, por las jóvenes dirigencias de relevo.

Esta importante herencia implicó también que el "modelo" sindical histórico, esto es, aquél estrechamente ligado a partidos políticos de centro e izquierda, entrenado para reivindicar a través de ellos en un sistema con importante presencia estatal, y débil en la empresa si no cuenta con referentes sectoriales (federativos) con capacidad de procesar y apoyar sus reivindicaciones, se haya mantenido en lo fundamental. Lo anterior ha significado que junto a los aspectos positivos de esa herencia, en las condiciones de autoritarismo imperante, de desprotección estatal y de lenta rearticulación de las formaciones partidarias y federativas, el sindicalismo haya tenido dificultades para imaginar modos de acción alternativos en una situación que cambió el contexto previo a 1973. En consecuencia, al mismo tiempo que el movimiento sindical no fue destruido en sus tradiciones básicas, lo que le permitió descongelarse a medida que hubo condiciones para ello, enfrentó obstáculos para generar más dinámicamente métodos de lucha que combinaran su experiencia histórica con las nuevas realidades del proceso post-73.

La desocupación en septiembre de 1985 era de 23.6 por ciento sobre la fuerza de trabajo, incluyendo a los programas gubernamentales de subsidio (PEM y POJH); en la industria alcanzaba al 16.0 por ciento, en la minería al 12.6 por ciento y en la construcción al 33.4 por ciento (Fuente: Departamento de Economía de la Universidad de Chile). Estas cifras reflejaron una leve mayoría respecto de 1984, pero mantuvieron siempre una tasa sobre el 10 por ciento de desocupados en casi todas las ramas de actividad, tendencia ya casi estructural en el último decenio militar, por lo que sus efectos sobre el sindicalismo siguen siendo graves.

CUADRO Nº 3
INDICE REAL DE REMUNERACIONES (*)
(Base: 1970 = 100)

Años	Indice General	Servicios de Ut. Pública	Minería	Manufactura	S. Público
1970	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1971	125,3	123,6	129,1	124,6	125,0
1972	126,6	119,0	100,6	138,9	123,2
1973	-	-	-	-	-
1974	64,1	52,9	53,7	72,5	61,8
1975	62,0	49,7	58,0	65,5	55,9
1976	65,4	50,5	64,1	74,0	58,5
1977	70,7	49,9	67,3	79,2	67,5
1978	75,1	56,0	67,5	87,7	69,8
1979	81,4	63,0	73,9	95,0	74,8
1980	88,5	70,9	75,8	105,5	80,4
1981	96,4	81,3	78,3	115,9	87,6
1982	96,1	79,1	71,7	111,2	93,4
1983	85,8	71,8	67,9	99,7	80,4
1984	85,9	71,7	69,7	98,6	81,0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (PET).

(*) 1960-73 y 1979-84 deflactado por IPC oficial.

1974-78 deflactado con IPC corregido por CIEPLAN.

Con todo, este fenómeno de expulsión de fuerza de trabajo no es el único factor que define la situación material del mundo laboral y sindical. En efecto, el proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora ha sido continuo. Así, el sueldo mínimo legal representa a diciembre de 1985 el 63.5 por ciento de su valor en 1981 (Fuente: INE deflactado por el Índice de Precios al Consumidor - IPC - oficial) y las remuneraciones en su conjunto cayeron un 19 por ciento en 1984 con respecto a 1970 (cuadro Nº 3). Durante 1985 este proceso de caída continuó progresivamente

(cuadro N° 4).

Por otra parte, la producción industrial entre enero-noviembre de 1984 y el mismo período de 1985 cayó en 1.3 por ciento, con particular impacto en el sector de bienes de consumo durable (-19.9 por ciento), según la SFF (Sociedad que agrupa a los empresarios industriales).

En consecuencia, el contexto material actual de la acción sindical está marcado por una permanente crisis de desocupación, caída de los ingresos y estancamiento industrial y económico en general, apenas contrabalanceado por un aún frágil crecimiento exportador sobre todo agroindustrial y una cierta contención del proceso inflacionario que alcanzó un 26.4 por ciento para 1985, tres puntos por

CUADRO N° 4
INDICE DE REMUNERACIONES
(Base: Dic. 1981 = 100)

	Indice General	Minería	Manufactura	Electr., Gas, Agua	Serv. Comunales y Sociales
Diciembre 1981	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Diciembre 1982	87,1	86,1	85,6	86,8	89,0
Diciembre 1983	83,4	89,9	82,9	81,8	79,1
Octubre 1984	78,7	84,6	77,3	77,1	77,8
Diciembre 1984	80,3	90,7	78,4	80,3	76,1
Enero 1985	83,2	88,8	79,3	83,3	87,1
Febrero 1985	82,5	86,5	78,8	83,8	86,2
Marzo 1985	81,0	87,5	77,5	82,0	84,4
Abril 1985	81,5	88,7	77,5	82,6	82,7
Mayo 1985	81,1	90,6	77,6	82,1	80,7
Junio 1985	78,6	87,5	76,2	82,4	77,8
Julio 1985	79,4	87,0	76,8	86,4	76,9
Agosto 1985	79,6	88,6	77,2	86,0	76,3
Septiembre 1985	80,1	88,1	77,1	85,9	74,6
Octubre 1985	79,9	84,6	87,4	78,2	73,6

FUENTE: INE, deflactado con IPC oficial (PETI).

encima del obtenido en 1984 (Fuente: INE). A lo anterior se reúne la elevada deuda externa, una de las más altas per cápita de América Latina, con sus efectos naturales sobre la capacidad de desarrollo del país.

El cuadro sociopolítico de 1986

En el plano sociopolítico, después de 1983, el ascenso de la movilización social en favor de la democratización del país, ya comentado antes, si bien situó al sindicalismo como uno de sus actores relevantes - al nivel de sus direcciones superiores - no fue acompañado todavía de una solidificación de las coaliciones políticas que debían acompañar al movimiento social. Por ello, éste último - y el sindicalismo en particular - permanece aún relativamente segmentado respecto de una estrategia sociopolítica coherente y compartida que le dé un referente de acción global y lo proyecte con más vitalidad. Así, la crisis de consenso que sufre el régimen militar, aunque lo ha debilitado drásticamente, incluso entre sus propios partidarios, todavía no ha producido su desplome, lo que le permite aún intentar estrategias que lo prolonguen hasta 1989, fecha en la cual aspira, de acuerdo a su propia Constitución (de 1980), a levantar alguna fórmula de continuidad con motivo del plebiscito a que deberá llamar para ratificar o no la prolongación del actual jefe de Estado.

CUADRO Nº 5
EVALUACION CUANTITATIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL,
1981 - 1985
 (sólo organizaciones legalmente constituidas)

	(1) Total Trabajadores sindicalizados	(2) Total de sindicatos	(3) Federaciones y Confederac.	(4) Org. Sindicales afiliados a (3)	(5) No. Trabaja- dores de (4)
1981	395.951	3.977	92	770	115.641
1982	347.470	4.408	96	816	104.757
1983	320.903	4.401	111	1.059	124.491
1984	343.329	4.715	128	1.370	149.142
1985 (p)	380.100	4.920	140	1.430	162.000

FUENTE: Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Año 1985, datos provisorios. Indicadores Económicos Sociales. PET No. 32.

El movimiento sindical se mueve en una situación materialmente constreñida y políticamente inestable desde el punto de vista de las fuerzas democráticas, factores ambos que operan dificultando su mejor articulación.

Con todo, el sindicalismo, pese a su drástica caída cuantitativa, hacia 1984 comenzó un lento proceso de recuperación, como lo muestra el cuadro Nº 5, lo que indica que la movilización social post-83 dinamizó también en cierta forma su

reconstitución, pese a lo limitado que ello aún pueda parecer.

Refuerza lo anterior, el hecho que las agrupaciones sindicales nacionales (CNT y CDT), más aquellas centrales de menor tamaño y los principales sindicatos nacionales, en su conjunto, han sido capaces de reagrupar una masa laboral superior a las cifras legalmente reconocidas. En efecto, una proporción no despreciable de organizaciones que no logran obtener reconocimiento legal se han incorporado a esas estructuras, llevando así, según datos para 1983, los 320.903 afiliados que identifica la Dirección del Trabajo a 463.185 sindicalizados efectivos (Fuente: P. Frías, Documento CED N° 83). Esto significa elevar la tasa de sindicalización del 10.5 por ciento de los ocupados al 15.1 por ciento para ese año.

En consecuencia, el movimiento sindical manifiesta hoy un perfil que remonta lentamente, pese a todo, su crisis post-73, cuestión que sin duda influirá para que el contexto sociopolítico en que opera la movilización democratizadora adquiera un mayor dinamismo desde el ángulo de los actores sociales.

Las tareas del sindicalismo

Los datos estructurales ya presentados y el escenario sociopolítico descrito, indican el grado de dificultades y posibilidades que enfrenta el sindicalismo para lograr su más plena rearticulación, así como para jugar el rol social que, dada su tradición y legitimidad históricas, le es asignado por el movimiento social y político democrático.

En esa perspectiva, tres parecen ser las tareas que comandarán el futuro próximo de los sindicatos chilenos, a juzgar por los debates que hoy los animan:

- 1) Lograr una asociación coherente y estable entre la lucha por la democracia política y las reivindicaciones corporativas de los trabajadores en la base. Este objetivo, que históricamente pudo ser conseguido en la trayectoria de la antigua CUT, aparece hoy obstaculizado por la ya comentada disociación relativa entre el rol político y el rol estrictamente laboral de las dirigencias. Ambas dimensiones - que podemos denominar política y social - requieren ser imbricadas en la estrategia sindical como un requisito básico para que el sindicalismo pueda poner en juego toda la potencialidad movilizadora a la que su actual legitimidad le permite aspirar. Esta tarea lo obliga, por así decirlo, a "sindicalizar" más su discurso político, al mismo tiempo que otorgar mayor privilegio a desarrollar estructuras fluidas de concatenación entre la empresa y las organizaciones de nivel intermedio y nacional.

2) Reelaborar su relación con los partidos políticos, acogiendo la experiencia de mayor autonomía relativa que constituyó su práctica en estos años ante la debilidad de su tradicional canal partidario de mediaciones con el sistema político y el Estado. Esto, que ya es un tema recurrente en el debate sindical, no ha alcanzado todavía una formulación madura y persistía la tensión entre la autonomía social y la dependencia partidaria. No se trata que en el sindicalismo esté emergiendo en absoluto una visión corporatista, sino que surge la búsqueda de un principio de identidad que pueda representar al mismo tiempo un mundo del trabajo plural, portado de visiones de sociedad diferenciadas, pero también unido por una común situación de existencia. Esta tensión entre pluralidad y unidad parece requerir que el sindicalismo encuentre una personalidad propia como sector social y no reproduzca, como su principio constitutivo central, la segmentación partidaria. Difícil tarea en un movimiento sindical históricamente hiperpartidizado, pero también consciente hoy de la demanda de representación global que viene desde una base social cuya característica principal es la exclusión y la segmentación.

3) Producir una estrategia que, asumiendo las dos tareas anteriores, sea capaz también de enfrentar el desafío de reconstruir una nación en riesgo de desintegración. En efecto, el movimiento sindical chileno se da cuenta siguiendo sus propios debates - que la capacidad de representar reivindicaciones y de lograr mayor autonomía social serán insuficientes para contribuir a la gestación de una sociedad otra vez democrática si los actores sociales de diferentes signos ideológicos y de intereses en competencia no se convierten en portadores de una idea común de reconstrucción nacional. Lo que está en juego, entonces, no es para el sindicalismo solamente la mutación de un régimen político por otro, sino la posibilidad de sobrevivencia misma de una comunidad nacional desestructurada y amenazada de inviabilidad por la crisis económica, social y moral que la afecta.

Lo anterior se expresa en la plataforma de concertación social y política por la democracia que han planteado todas las centrales sindicales, apelando al empresariado, a las capas profesionales, a los jóvenes y particularmente al amplio sector de los marginalizados por el modelo económico, con el fin de buscar las convergencias necesarias que aseguren el carácter nacional y mayoritario del proceso que lleve a dicha democracia.

La capacidad que tenga el movimiento sindical para articular estas tareas no está todavía asegurada. Sobreviven en su interior tendencias que pueden dificultar la fluidez de tal esfuerzo. Entre ellas ciertas prácticas cupulares aún no decantadas, el

ideologismo que oscurece en algunos sectores la visión de la nación como el espacio principal a reconstruir, favoreciendo un autonomismo defensivo de clase o un corporatismo limitado y la persistencia, en ocasiones, de un partidismo todavía excluyente. Pero junto a sus propias limitaciones, están también las de los otros actores sociales y políticos. En especial la dificultad de las fuerzas políticas para ofrecer estrategias consistentes con su objetivo de democratización a corto plazo del país y la inercia de un empresariado que, aunque desarticulado económicamente, no logra adoptar posiciones definidas y conserva fantasmas ideológicos que lo anulan.

Con todo, el movimiento sindical ha logrado definir el perfil de sus tareas, identificar sus interlocutores e iniciar un movimiento en dirección a los objetivos que suponen esas tareas y las concertaciones que le son necesarias. Por ello, 1986 puede ser un año muy decisivo para fundar un rol destacado en la lucha social del país en favor de la democracia y los intereses de la clase trabajadora que aquélla puede asegurar, después de tan largo tiempo de exclusión. De alguna manera su desafío es hoy, entonces, semejante al que, hace cien años, en Chicago otros como ellos lograron responder.